

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022).

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, procede dentro del proceso ordinario con radicado número 05001-31-05-018-2013-01438 01, promovido por ANDRES HERNANDO ECHEVERRI QUIMBAYA contra PROYECTAR VALORES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA, a resolver los recursos de apelación presentados por los apoderados de las partes, contra la sentencia condenatoria emitida el 24 de agosto de 2016 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **255 de 2022**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, el demandante pretende que se declare que, los pagos que le efectuó la demandada a título de “participación de Utilidades” constituyen salario ordinario variable, y en consecuencia se le condene al pago de:

- Cesantías y sus intereses con la correspondiente sanción legal, y la prima de servicios.
- Indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
- Indemnización moratoria del artículo 65 del CST
- Reajuste de vacaciones
- Bono o título pensional derivado de la relación laboral, y en consecuencia, el 100% del total de los aportes dejados de cancelar para pensión durante el periodo del 22 de enero de 2007 al 22 de julio de 2011, teniendo como Ingreso Base de Cotización todos aquellos pagos constitutivos de salario.
- Indexación
- Costas

Como pretensiones subsidiarias solicita se declare que, los pagos efectuados por la demandada a título de “participación de utilidades” constituyen salario integral. Y en consecuencia se condene al empleador a pagar:

- El factor prestacional de los pagos efectuados a título de participación de utilidades, en virtud del acuerdo de salario suscrito por las partes.
- Indemnización moratoria del artículo 65 del CST por no haber cancelado en termino las prestaciones sociales conformadas por el factor prestacional aplicable a los pagos denominados participación de utilidades.
- Reajuste de vacaciones con los pagos constitutivos de salario.
- Bono o título pensional derivado de la relación laboral, y en consecuencia, el 100% del total de los aportes dejados de cancelar para pensión durante el periodo del 22 de enero de 2007 al 22 de julio de 2011, teniendo como Ingreso Base de Cotización todos aquellos pagos constitutivos de salario.
- Indexación
- Costas

Para fundamentar sus pretensiones expuso que laboró para la demandada del 22 de enero de 2007 al 22 de julio de 2011, mediante contrato de trabajo a término indefinido, las actividades desarrolladas eran las de promotor de ventas y/o asesor financiero generando ingresos económicos para la demandada. Como parte de la retribución de los servicios le pagaban un salario integral de \$7.000.000. Además, le reconocieron sumas por “participación de utilidades”, que fueron excluidas de

la base salarial y prestacional, para tener derecho a estas debía cumplir una meta mensual fijada por su empleador. Tales pagos se causaron como retribución directa de sus servicios. Sus prestaciones sociales y vacaciones fueron liquidadas sin tener en cuenta las comisiones devengadas, igual que los aportes a seguridad social.

La demanda **fue admitida en auto del 20 de enero de 2014**. Notificada la entidad demandada, se opone a las pretensiones del demandante aduciendo que el salario pactado nunca estuvo integrado por un salario variable, pues desde el inicio de la relación laboral se dejó claro que devengaría salario integral, por lo que, ni desde el momento de la celebración del contrato de trabajo, ni durante la vigencia del mismo fueron pactadas el pago de comisiones o salarios variables por la labor que desarrollaba el demandante como retribución al mismo, ni pagos adicionales sobre sumas variables. Alega que los pagos por concepto de participación de utilidades se realizaron de manera voluntaria y no como contraprestación directa de los servicios prestados por este. Propone como excepciones de mérito inexistencia de las obligaciones demandadas, falta de causa en las pretensiones de la demanda, prescripción, compensación, autonomía de la voluntad.

En **sentencia del 24 de agosto de 2016**, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la demandada de las pretensiones principales.

Declaró que los pagos efectuados por la demandada a título de participación de utilidades constituyen salario integral a favor del demandante. Condenó a la demandada a reliquidar las vacaciones pagadas al demandante durante todo el contrato de trabajo, tomando en cuenta el mayor valor que se haya generado como efecto de considerar que la participación de utilidades tiene el carácter salarial. Dicho reajuste deberá indexarse al momento del pago de la sentencia.

Condenó a la demandada a reconocer y pagar al demandante el mayor valor por concepto de aportes a la seguridad social en pensiones, a través de la aseguradora pensional a la que se encuentre afiliado el demandante, mayor valor generado a lo largo de todo el contrato de trabajo, teniendo en cuenta la reliquidación de la base

de cotización de utilidades, teniendo en cuenta que ha de descontarse de ese mayor valor lo correspondiente al porcentaje que le correspondía al trabajador.

Absolvió de las restantes pretensiones subsidiarias y condenó en costas a la demandada fijando agencias en \$3.000.000

RECURSO DE APELACIÓN

La decisión fue recurrida por ambas partes. El demandante presenta inconformidad frente a lo que tiene que ver con que se absuelva a la demandada de los aportes al fondo de pensiones en el 25%. Considera que esta deducción no es procedente por cuanto dicho pago no se hizo por negligencia del trabajador, al contrario, se demostró que desde que el demandante se vinculó a la demandada esos pagos eran constitutivos de salario, y esta a sabiendas de las posibles consecuencias que ello acarrearía, prefirió mantenerlos como no constitutivos de salario, por lo que no existe buena de la demandada y debe ser condenada al pago absoluto de los aportes a seguridad social en pensiones.

La parte demandada presenta inconformidad con la sentencia en los siguientes puntos:

i) Frente a los pagos que no constituían factor salarial indica que, según las pruebas obrantes en el proceso, las partes fueron absolutamente claras en determinar la manera en la que se remunerarían los servicios y sobre los pagos que no constituían factor salarial, para lo cual acudieron a la Ley 50 de 1990, artículo 128 del CST, el cual le permite a las partes hacer ciertas deducciones de los factores prestacionales que conformarían ese salario integral, por lo que en un acto de mera liberalidad, de buena fe entre ellas se decidió acogerse a este principio y efectivamente hacer desalarizaciones. Afirmo que no se le ha dado la trascendencia real al acta de adición que firmaron las partes el 22 enero 2007, la cual no ha sido demandada por algún vicio en el consentimiento o porque se hubiese obligado al actor a suscribir estos acuerdos. Añade que la intención de las partes y la finalidad al momento de pactar

una participación de utilidades de la manera en que se hizo está clara desde el momento mismo en que suscribe el contrato y se hizo el acta de adición, y que a lo largo de la relación laboral se puede observar que efectivamente la voluntad de las partes no fue otra que hacer exclusiones de esas participaciones salariales como factor prestacional.

ii) Respecto a la excepción de prescripción dice que, si bien es cierto la demanda fue presentada antes de los 3 años de finalizada la relación laboral, término que implicó la interrupción de la prescripción de los derechos a favor de trabajador, no debe olvidarse que el artículo 488 del CST explica que las acciones laborales prescriben en el término de tres años, y que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que esta prescripción se va haciendo efectiva en la medida en que se van haciendo exigibles los derechos, por lo que, para el tema de condenas y para efectos de vacaciones este término ha debido verse interrumpido hasta el año 2009 y no desde el 2007, fecha en que inició el contrato de trabajo entre las partes, toda vez que el término debe contarse 3 años hacía atrás independientemente que se haya interrumpido para los demás derechos.

Teniendo en cuenta que la demandada siempre atendió y dio cumplimiento a lo pactado entre las partes de buena fe, solicita revocar las condenas y en especial, insiste en el término de prescripción en relación con la condena efectuada a los reajustes por concepto de vacaciones.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandada presentó alegatos de conclusión insistiendo en lo argumentando en su recurso de alzada.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar **i)** si las sumas pagadas al demandante a título de anticipos y participación de utilidades, presentan los requisitos legales para ser consideradas factor salarial. De acreditarse lo anterior, se establecerá **ii)** si hay lugar a reliquidar las vacaciones pagadas al demandante durante todo el contrato de trabajo como lo dispuso el *a quo*, o si por el contrario, como lo afirma la demandada en su alzada, se encuentra configurada la prescripción, y, **iii)** si es dable descontar el 25% del valor de los aportes al sistema de seguridad social pensional en la cuantía que correspondía al aporte que debía realizar el trabajador, tal y como lo ordenó el *a quo*.

CONSIDERACIONES

Frente a los recursos promovidos, la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

Están fuera de controversia en el presente proceso los siguientes aspectos:

- La existencia de la relación laboral entre Andrés Hernando Echeverri Quimbaya y Proyectar Valores S.A. Comisionista de Bolsa en Liquidación Forzosa Administrativa, del 22 de enero de 2007 al 22 de julio de 2011 regida por un contrato de trabajo a término indefinido.
- El cargo del demandante que corresponde al de promotor comercial, y posteriormente de asesor financiero.
- Los pagos que recibió fueron por concepto de salario integral y por anticipos de participación de utilidades, las cuales se realizaban de manera habitual.

Lo anterior, porque así lo estableció el *a quo* en la sentencia que se revisa, y dichos puntos no fueron objeto de reparo por ninguna de las partes, por lo que en consecuencia quedarán incólumes.

i) Anticipos y participación de utilidades como factor salarial.

De la prueba obrante en el proceso evidenció el *a quo* el carácter permanente de los pagos denominados como anticipos y participación en utilidades, concluyendo que los pagos efectuados por la demandada a título de participación de utilidades constituyen salario integral a favor del demandante, en tanto eran una remuneración directa por el servicio.

Por su parte, la demandada alude en su alzada a la Ley 50 de 1990 y al artículo 128 del CST, indicando que tales normas permiten a las partes hacer ciertas deducciones de los factores prestacionales que conformarían el salario integral, y que en un acto de mera liberalidad y de buena fe se acogieron a este principio y se hicieron desalarizaciones desde el momento mismo en que suscribe el contrato y se hizo el acta de adición.

De cara a esta cuestión se tiene que, el Código Sustantivo del Trabajo en sus artículos 127 y 128, modificados respectivamente por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, define los elementos integrantes del salario y aquellos pagos que no lo constituyen, de la siguiente forma:

ARTÍCULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.

ARTÍCULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el {empleador}, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad.

Ahora, los pagos realizados por el empleador al trabajador por regla general son retributivos de la prestación personal del servicio, a menos que resulte claro que su entrega obedece a una finalidad distinta, siendo el empleador quien tiene la carga de probar que su destinación tiene una causa no remunerativa, conforme lo tiene establecido la jurisprudencia especializada en sentencias como la SL5159 Radicación n.º 68303 del 14 de noviembre de 2018, donde se indicó:

“3.4. LAS CARGAS PROBATORIAS DE LA EMPRESA

Por último, esta Corte ha insistido en que por regla general los ingresos que reciben los trabajadores son salario, a menos que el empleador demuestre su destinación específica, es decir, que su entrega obedece a una causa distinta a la prestación del servicio. Lo anterior, hace justicia al hecho de que el empresario es el dueño de la información y quien diseña los planes de beneficios, de allí que se encuentre en una mejor posición probatoria para acreditar la destinación específica de los beneficios no salariales, como podría ser cubrir una contingencia, satisfacer una necesidad particular del empleado, facilitar sus funciones o elevar su calidad de vida.

Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL12220-2017, la Corte adoctrinó:

[...] no sobra recordar que el binomio salario-prestación personal del servicio es el objeto principal del contrato de trabajo y, por consiguiente, los pagos realizados por el empleador al trabajador por regla general son retributivos, a menos que resulte claro que su entrega obedece a una finalidad distinta. Bajo esta consideración, el empleador es quien tiene la carga de probar que su destinación tiene una causa no remunerativa.

Al respecto, en sentencia CSJ SL8216-2016 la Corte señaló:

Se pactó así, en favor del trabajador el pago de \$362.000 mensuales a título de auxilio y se le restó incidencia salarial. Sin embargo, en dicho documento no se presentó una explicación circunstancial del objetivo de ese pago, ya que no se justificó para qué se entrega, cuál es su finalidad o qué objetivo cumple de cara a las funciones asignadas al trabajador. Es decir, las partes en el referido convenio le niegan incidencia salarial a ese concepto sin más, de lo que habría que concluir que se trata de un pago que tiene como causa inmediata retribuir el servicio subordinado del demandante.”

Lo primero que debe indicarse es que en este caso la demandada no demostró la destinación específica de los pagos por anticipos de participación de utilidades o participación de utilidades. Además, se evidencia que lo pretendido con dichos pagos era retribuir un mejor desempeño del trabajador en las funciones que se le encomendaban, característica que ratifica, sin duda, la naturaleza salarial del pago

por cuanto constituía una contraprestación directa del servicio. Basta observar, para llegar a la anterior conclusión, que el demandante indica en el hecho 8° de la demanda que para acceder a las comisiones o participación de utilidades debía cumplir una meta mensual fijada por su empleador, y en respuesta indicó la empresa demandada que “para conceder el beneficio de participación de utilidades...los empleados que trabajaban en el área comercial debía cumplir unas metas como punto para determinar cuándo contribuyeron con la generación de utilidades”. Además, tal exigencia de cumplimiento de metas para el pago de dichos conceptos aparece estipulada en el numeral 4° del acta de adición del contrato celebrada el 22 de enero de 2007.

De ahí que tal remuneración se le pagaba por las funciones desarrolladas en beneficio de la empresa, por lo que, era uno de aquellos pagos que constituían una contraprestación directa del servicio, a pesar de su denominación. Así lo ha entendido la jurisprudencia de la H. CSJ en sentencias con radicación n.º 39475 del 14 de junio de 2012, CSJ SL1399-2019, entre otras. Inclusive, en la **SL4233-2019 Radicación n.º 72222 del 30 de septiembre de 2019**, donde se trató también de un tema de *«participación de utilidades»*, indicó:

Es evidente, que a pesar de que hubo consenso entre las partes, se le restó carácter salarial a un pago que remuneraba de manera directa el servicio prestado, porque si bien lo denominaron como *«participación de utilidades»*, lo cierto es que se generaba no porque la empresa las obtuviera, sino por la gestión que realizara el demandante frente a los proyectos o negocios que lograra conseguir.

Incluso, con acierto la censura denunció como prueba no apreciada los estados financieros de la sociedad, porque de los aportados al proceso lo único que se evidencia es que en el año 2011 la pérdida neta ascendió a cuatro mil ochocientos seis millones de pesos, mientras que para el año 2010 había sido de quinientos noventa y nueve millones de pesos, según se lee en el estado de ganancias y pérdidas de folio 32 del expediente.

De la misma forma, el estado de ganancias y pérdidas comparativo entre los años 2011 y 2012 (f.º 34), refleja que la pérdida neta para la última anualidad ascendió a cinco mil ochocientos dieciséis millones, esto es, un poco más de la pérdida neta sufrida en el año 2011.

Entonces, así se le considerara como un pacto válido a la luz de lo previsto en el artículo 128 del código sustantivo del trabajo, de la realidad emerge la conclusión sobre su connotación salarial, pues si en verdad estuviera atado a las utilidades de la empresa, no se habría causado entre los

años 2010 y 2012, donde la sociedad sufrió pérdidas aproximadas a los once mil doscientos millones de pesos.”

Se destaca que los pagos por participación de utilidades se caracterizan por ser ocasionales o por mera liberalidad del empleador, sin que el trabajador tenga que ser accionista para su reconocimiento, conforme al artículo 128 del CST. Siendo necesario que se determinen los criterios conforme a los cuales se liquida una participación de utilidades. Prueba que brilla por su ausencia en tanto no fueron aportados los estados financieros de la sociedad o balances generales. Ahora, si realmente las sumas entregadas habitualmente al demandante estuvieran atadas a las utilidades de la empresa, debió allegarse prueba que establezca cuáles fueron las utilidades de la empresa en vigencia de la relación laboral y a qué porcentaje correspondía la participación en utilidades.

Aunado a lo anterior, resulta ilógico que se realizara el pago por participación de utilidades mensualmente, pues solo al realizarse los estados financieros del ejercicio fiscal anual se podría establecer si existían utilidades en la empresa demandada en las que pudiera participar el actor, por lo que no es razonable que se hicieran los pagos periódicos anticipados con el salario que devengaba el actor cada mes, lo que denota que este pago dependía no de las utilidades que tuviera la empresa si no del cumplimiento mensual de las metas que lo generaban. Y si bien es posible determinar la utilidad contable en una empresa mensualmente, en todo caso quedó demostrado, porque así lo aceptó la demandada y se infiere de la prueba documental, que la participación en utilidades pagadas al demandante se generaba y pagaban de acuerdo a las metas a cumplir y no por las utilidades que percibía la demandada, las que se insiste, no fueron demostradas.

Ahora, si bien ambas partes suscribieron el “ACTA DE ADICIÓN AL CONTRATO DE TRABAJO” el 22 de enero de 2007 donde “declaran y ratifican que las sumas de dinero por reconocimientos o participación de utilidades que sea pagado al empleado de manera habitual u ocasional no constituye factor de salario para ningún efecto”¹, se resalta que en materia laboral existe el principio de la realidad y de irrenunciabilidad de derechos ciertos e indiscutibles, según el cual en

¹ FL.138-139

las relaciones de trabajo no es dable atenerse exclusivamente a lo acordado entre las partes en algún documento o de manera verbal, sino a la realidad en la que se desarrolló las situaciones concernientes al contrato de trabajo a la luz de las normas legales y los criterios jurisprudenciales, y en este caso, se evidencia que de la forma en que se estipuló que el actor devengaría la “participación en utilidades”, en el documento referido por la parte demandada en su alzada, no queda ninguna duda que ella no hacía otra cosa que retribuir al demandante por la forma en que realizará el trabajo, es decir por el cumplimiento de unas metas mensuales, lo que desdibuja el reconocimiento de tales sumas por mera liberalidad y para mejorar la calidad de vida del trabajador como lo adujo la representante legal de la demandada en su interrogatorio de parte, sino que las mismas evidentemente retribuían los servicios prestados por el demandante.

Bajo el contexto anterior, si al documento referido nos atenemos como se indicó en la apelación, emerge con claridad que las sumas que percibía el demandante adicional al salario fijo integral pactado, las recibía como retribución a su trabajo en consideración al cumplimiento de unas metas y de manera periódica, por lo que constituían factor de salario. Razón por la cual se **confirmará** la sentencia en este punto.

ii) Reajuste de vacaciones

El *a quo* condenó a la demandada a reliquidar las vacaciones pagadas al demandante durante **todo** el contrato de trabajo, tomando en cuenta el mayor valor que se haya generado como efecto de considerar que la participación de utilidades tiene el carácter salarial. Lapso con el que no está de acuerdo la demandada indicando que si bien se presentó la demanda antes de los 3 años de finalizada la relación laboral, la prescripción se va haciendo efectiva en la medida en que se van haciendo exigibles los derechos.

Punto frente al cual le asiste razón a la recurrente pues la relación laboral fue del 22 de enero de 2007 al 22 de julio de 2011 y la demanda se presentó en la oficina

judicial de Medellín el 29 de noviembre de 2013², por lo que, conforme a los artículos 151 del CPT y de la S.S. y 488 del CST, se encuentran prescritos los periodos de vacaciones por los periodos 2007-2008 y 2008-2009, en tanto el término de prescripción de 3 años establecido en tales normas, se cuenta desde la exigibilidad de cada periodo, que en este caso lo es dentro del año siguiente a la causación del derecho, acorde con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo, así:

PERIODO		PLAZO PARA RECLAMAR	PRESENTACIÓN DEMANDA	
22/01/2007	21/01/2008	21/01/2012	29/11/1013	Prescrito
22/01/2008	21/01/2009	21/01/2013	29/11/1013	Prescrito
22/01/2009	21/01/2010	21/01/2014	29/11/1013	
22/01/2010	22/07/2011	21/01/2015	29/11/1013	

Dado lo anterior, ante la configuración parcial de la excepción de prescripción, se **modificará** la decisión y se condenará a la entidad demandada a reliquidar las vacaciones pagadas al demandante por el periodo **22 de enero de 2009 al 22 de julio de 2011**, en lo demás queda incólume lo resuelto en el este punto, esto es que para el efecto se tomará en cuenta el mayor valor que se haya generado como efecto de considerar que la participación de utilidades tiene el carácter salarial. Dicho reajuste deberá indexarse al momento del pago de la sentencia.

iii) Descuento del 25% del valor de los aportes al sistema de seguridad social pensional.

Alega la parte demandante en su alzada que, no se le puede descontar el 25% del valor de los aportes al sistema de seguridad social pensional ordenado por la *a quo*, por cuanto dicho pago no se hizo por negligencia del trabajador, sino por decisión unilateral de la demandada al no considerar dichos pagos como constitutivos de salario.

² Fl.31

Sin embargo, se confirmará la sentencia en este punto al compararse el criterio tomado en la sentencia proferida el 8 de marzo de 2016, dentro del proceso con radicado 05001310500720130153901 contra la acá demandada, cuyo ponente fue el Magistrado Dr. Francisco Arango Torres, esto es que, de las cotizaciones al sistema pensional que se condenó a pagar a la parte demandada, se debe descontar el porcentaje que legalmente le correspondía realizar al actor de “participación de utilidades”, que finalmente se estableció que constituía salario, pues a pesar que el artículo 22 de la ley 100 de 1993 señala que **”El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador”**, esta norma se ha de interpretar en el sentido que el empleador no haga los citados descuentos cuando ninguna discusión existe sobre el salario devengado, mas no cuando como en este caso existía controversia sobre la “participación de utilidades” devengada por el actor como factor de salario, a las que solo se le dan la calidad salario con la decisión que en este fallo se produce, es decir, que el citado descuento a la seguridad social no se produjo por negligencia de la parte demandada sino por el convencimiento que tenía la demandada de la no naturaleza salarial, lo que a juicio de la Sala no permite aplicar la sanción de la preceptiva lega citada.

Máxime cuando en sentencia SL2885-2019 Radicación n.º 73707 del 17 de julio de 2019, al tratar sobre el alcance del artículo 22 de la Ley 100 de 1993, indico la Sala Laboral de la H. CSJ:

“Entonces, a juicio de la Corte, no tiene fundamento la postura jurídica a que alude el recurrente, puesto que de la disposición trascrita no emerge la sanción que aquel señala, esto es, que cuando el empleador incumple la obligación de pagar los aportes al sistema de seguridad social, debe asumir en su totalidad tal valor. En efecto, el incumplimiento de la obligación del empleador como *agente recaudador del aporte* no supone que el trabajador quede exonerado de sufragar el porcentaje que le corresponde.

De modo que la sanción a la que se refiere la censura no está consagrada en ninguna disposición de la regulación del sistema de seguridad social, ni mucho menos cuando se trate de la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo realidad, porque, en este evento, como en aquellos en que no se discuta la existencia de una relación de trabajo subordinada, tanto el empleador como el trabajador deben sufragar el porcentaje que les

corresponde por cotizaciones al sistema general de pensiones.”

De ahí que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, el 25% de la cotización a pensiones le correspondía al demandante. Por lo que se **confirmará** la sentencia en este punto.

En síntesis, se **confirmará** y **modificará** la sentencia en los términos indicados.

Sin costas en esta instancia, pues si bien la parte demandante resultó vencida en su alzada, igual suerte corrió la parte demandada a quien no le prosperó íntegramente su recurso.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 24 de agosto de 2016, que se revisa en virtud de los recursos de apelación de ambas partes. Y ante la configuración parcial de la excepción de prescripción, se CONDENA a la entidad demandada a reliquidar las vacaciones pagadas al demandante por el periodo **22 de enero de 2009 al 22 de julio de 2011**, en lo demás queda incólume lo resuelto respecto a la reliquidación de dicho concepto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: son costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cd324da864b229e310c368a1e970215f9926ee572d3ab82b02bf221a3516a572**

Documento generado en 27/10/2022 03:15:08 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>